



Distrito Judicial de Mocoa
Juzgado Primero Civil del Circuito
Especializado en Restitución de Tierras

Mocoa, 27 de Enero de 2015

Oficio J1CERT No: 00394
N.Proceso:860013121001-2014-00155-00
(Favor citar al contestar)

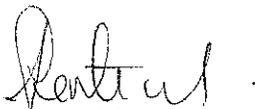
Doctor
Julio Byron Mora Castillo
Representante Víctima
UAE GRTD
Barrio Olímpico Calle 14 #7-15
Celular 311 5614 807
Mocoa (Putumayo)

Ref.: Comunicación Sentencia No. 00001
del 23/01/2015

Cordial saludo,

Por el presente me permito comunicar a Usted, en forma respetuosa, la sentencia #00001 de fecha 23 de enero de 2015, proferida por este Despacho dentro de la acción de restitución de tierras y/o formalización de títulos, radicada al número 860013121001-2014-00155-00, para lo cual se remite copia de la misma.

Atentamente,


Renata Martínez Muñoz
Secretaria AD HOC

Anexo uno: copia de la sentencia No. 00001, en doce (12) folios.

Dra. Renata M. M.

J. C. M.



Rama Judicial del Poder Público
Juzgado Primero Civil del Circuito
Especializado en Restitución de Tierras
Mocoa - Putumayo

ASUNTO: SENTENCIA DE UNICA INSTANCIA #00001
PROCESO: RESTITUCIÓN DE TIERRAS Y/O FORMALIZACIÓN DE TÍTULOS
SOLICITANTE: YANET IDROBO
ARTURO WILLIAR CEPEDA CASTILLO
OPOSITORES: PERSONAS INDETERMINADAS
RADICADO: 860013121001-2014-00155-00

JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO,
Especializado en Restitución de Tierras de Mocoa,
Mocoa, Veintitrés (23) de Enero de dos mil quince (2015).

Profiere éste despacho la sentencia que en derecho corresponda dentro del proceso de la referencia.

1. PRETENSIONES

Se solicita que se proteja el derecho fundamental a la restitución de tierras de la solicitante, en su calidad de víctima y propietaria del bien y su núcleo familiar, así mismo, se den las órdenes enunciadas en el artículos 72, 91 y 121 de la Ley 1448 de 2011, ello en cumplimiento del deber de garantizar la prevalencia de los derechos de aquellos y del derecho de retorno o reubicación voluntaria en condiciones de sostenibilidad, seguridad y dignidad.

2. HECHOS

2.1 La señora **YANET IDROBO** identificada con la cédula de ciudadanía No. 27.443.058 expedida en San Lorenzo, Nariño, y el señor **ARTURO WILIAR CEPEDA CASTILLO**, identificado con cedula de ciudadanía No. 13.073.218 expedida en Mocoa, Putumayo, son **PROPIETARIOS**, desde el año 1998, del predio situado en la vereda El Placer, de la Inspección de Policía del Placer, Municipio Valle del Guamuez, Departamento del Putumayo, el cual se individualiza de la siguiente manera:

MATRICULA INMOBILIARIA	CÓDIGO CATASTRAL ANTERIOR	CÓDIGO CATASTRAL VIGENTE	ÁREA TOTAL DEL PREDIO
442-45558	86-865-00-02-0001-0303-000	86-865-00-02-0001-0983-000	380 M2

Adicionalmente se tienen las siguientes coordenadas geográficas:

PUNTOS	COORDENADAS PLANAS		LONGITUD			LATITUD		
	NORTE	ESTE	Grados	Min.	Seg.	Grados	Min.	Seg.
215	543632.99647300000	676270.84132400000	76°	59'	4.044" w	0°	28'	6.412" N
216	543613.03741600000	676263.69457500000	76°	59'	4.275" w	0°	28'	5.763" N
217	543612.98062200000	676248.69468200000	76°	59'	4.759" w	0°	28'	5.761" N
218	543632.09260500000	676246.85835000000	76°	59'	4.819" w	0°	28'	6.382" N

Así mismo se han identificado los siguientes colindantes:

COLINDANTES ACTUALES	
NORTE	Partiendo desde el punto 218 en línea recta en dirección oriente, en una distancia de 24 mts hasta llegar al punto 215 con predios de Raquel Cuaran.
ORIENTE	Partiendo desde el punto 215 en línea recta en dirección Sur, hasta llegar al punto 75 en una distancia de 21,2 mts con predios de Via Urbana El Placer.
SUR	Partiendo desde el punto 75 en línea recta en dirección Occidente, hasta llegar al punto 216 en una distancia de 21,2 mts con predio Juan Bautista Guerrero.
OCCIDENTE	Partiendo desde el punto 217 en línea recta en dirección Norte, cerrando con el punto 218 en una distancia de 19,2 mts con predios del a señora Teresa Perez.

2.1.1 El núcleo familiar de la solicitante se encuentra conformado de la siguiente manera:

NOMBRES	APELLIDOS	EDAD	VINCULO	Presente al momento de la victimización	
				SI	NO
Jissela Vannesa	Cepeda Idrobo	7	Hija		x
Disney Stefanny	Cepeda Idrobo	8	Hija		x

debido a los hechos de violencia generados con ocasión del conflicto armado, y al temor por sus vidas, se vieron obligados a desplazarse de su predio en dos ocasiones, en el mes de marzo del año 2003 y en el año de 2006, porque como narra ella,

"(...) Llegue a este municipio en el año de 1998. Trabaje en oficios varios, al tiempo me organice con mi compañero y nació mi hija mayor y con mi compañero decidimos construir la casa en un lote que tenía. Todo era normal hasta el 7 de noviembre de 1999, fecha en que llegan las autodefensas al placer y mataron a 11 campesinos. Durante estos años la situación económica se torno (sic) muy dura y el conflicto se agudizo, el 8 de marzo de 2003, se presentó un duro enfrentamiento entre guerrilla y paramilitares en el Placer, inicio con tiros aproximadamente a las 4 a.m., luego grandes explosiones a eso de las 6 a.m. empeso (sic) la gente a salir del pueblo mi familia no pude salir temprano puesto que el comandante Pipas puso un reten (sic) y no nos dejo (sic) salir sino hasta las 2 p.m. salimos con destino a la Hormiga, la mayoría de personas estaban en la Escuela de la Parque, sitio que organizo la administración municipal como albergue, pero al llegar con mis 2 hijos ya no alcanzamos, era mucha gente, por lo que nos fuimos a la casa de un tío de las niñas donde permanecemos 15 días luego me desplace para San Lorenzo, luego de 3 meses al ver la situación que económicamente no podía sostener la familia decidi (sic) regresar al Placer y retornar a nuestra casa. Este retorno no se realizo (sic) con protocolos. Habían ocupado mi casita, el que operaba el grupo era uno llamado Antanas y un día mi hija Gisella encontró una granada que los paracos habían dejado en el piso mi hija tenía un año y medio por esto se presentó dificultades con los para (sic) pero al fin dejaron la casa y nos dijeron que nosotros eramos (sic) cómplices de la guerrilla. Solicito apoyo con subsidio de vivienda y proyectos productivos... (...)

(...)el primer desplazamiento ocurrió el siete 7 de noviembre de 1.999, cuando yo vivía en el ranchito que queda ubicado a la salida a la Esmeralda cerca de la Estación de Policía, llegaron los paramilitares, echaban plomo hubieron (sic) muchos muertos, Salí corriendo por la vía a la Esmeralda por un potrero y me quede donde

una vecina hasta las 3.00, P.M hubo la orden de matarnos, por eso yo me desplace hasta Siberia y de ahí a Pasto, donde estuve casi año, de ahí regrese donde encontré a los paracos en mi rancho, como era dueña de la casa solicite que me la desocuparon al otro día me la entregaron.

(...) luego con el pasar del tiempo en mi casa tenia sembrado yuca y plátano y en los solares de unos vecinos tenia gallinas, mi segundo desplazamiento hubieron (sic) combates duros, y Salí desplazada nuevamente para la hormiga... (...)

(...) Al principio llegue a vivir sola a trabajar y de ahí conocí a don Arturo Cepeda Castillo, él trabaja con doña Teresa Ortega de Linares, juntos trabajamos y compramos el lotecito, luego o nos fuimos a trabajar a una finca llamado Alto Lucia, de allá sacamos la madera para hacer el rancho, cuando quede en embarazo regresamos al pueblo a la casa de doña Teresa, de allí terminamos de hacer el rancho donde vivimos hasta que llegaron los paracos (sic)... (...)

(...) no somos casados solo vivimos en unión libre... (...) lo que quiero, es que por este medio como bien lo ha manifestado quien fue mi esposo Wiliar Arturo Cepeda Castillo, es que esta casa quede a nombre de mis hijas, ya que el renuncia a su parte por lo tanto es bueno que se liquide lo que llaman la sociedad conyugal ... (...)

2.1.2 Aparece la solicitante y su núcleo familiar en el Registro Único de Víctimas desde el 17 de Septiembre del año 2010.¹

2.1.3 La señora YANET IDROBO solicitó² ante la Unidad³ Administrativa Especial de Gestión de Tierras Despojadas - Territorial Putumayo, la inclusión del predio en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente, predio que se encuentra dentro de un área macro y micro focalizada de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 4829 de 2011, Decreto 599 de 2012 y con la Resolución RPM 0003 del 31 de agosto de 2012. Se inició al estudio de dicha solicitud, adelantado el trámite administrativo culminó con la Resolución No. RPR-006⁴ del 23 de enero del 2014, mediante la cual se inscribió en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente la solicitante, el predio, su núcleo familiar y demás especificaciones señaladas en la Ley 1448 de 2011 y decretos reglamentarios.

3. CRONICA PROCESAL

3.1 La demanda⁵ fue presentada ante este despacho el día 21 de Abril de 2014⁶, y al cumplir con el requisito de procedibilidad⁷, se admitió⁸ y ordenó su notificación en prensa a diversos sujetos, lo que se cumplió el 24 de Mayo de

¹ A folios 48 del cuaderno principal.

² A folios 34 al 39 del cuaderno principal.

³ Entidad que denominaremos en esta providencia UNIDAD DE TIERRAS.

⁴ A folio 88, constancia de inscripción en el registro de tierras.

⁵ A folios 1 a 112 y del 116 al 122 del cuaderno principal.

⁶ Constancia secretarial a folio 113 del cuaderno principal.

⁷ A folio 88, constancia de inscripción en el registro de tierras.

⁸ Auto del doce (12) de Mayo de 2014, a folios 123 a 125 del cuaderno principal.

2014 en el Diario El Tiempo⁹, así mismo, por correo al Alcalde del Valle del Guamuez y al Ministerio Público¹⁰.

3.2 El día 16 de Junio de 2014¹¹ venció el término, de quince días siguientes a la publicación o notificación en prensa, a las personas que tengan derechos legítimos relacionados con el inmueble, los acreedores con garantía real y otros acreedores de obligaciones relacionadas con el inmueble, así como a las indeterminadas y aquellas que se consideren afectadas por la suspensión de procesos y procedimientos administrativos, para que comparecieran al proceso e hicieran valer sus derechos. No haciéndose presente nadie ni como opositor o tercero interesado.

3.3 Vencidos los términos de traslado se decretaron las pruebas¹², concediendo un término de 30 días hábiles para practicarlas. Vencido estos términos se dio traslado¹³ al Ministerio público.

4. MARCO JURÍDICO CONCEPTUAL

Previo a decidir el caso en cuestión se requiere hacer unas precisiones de orden jurídico conceptual, que nos servirán para definirlo y enmarcar las órdenes que deban darse, así:

4.1 CONCEPTO DE VÍCTIMA DESDE EL ARTÍCULO 3 DE LA LEY 1448 DE 2011.

El Estado Colombiano a través de la Ley 1448 de 2011 implementa diversas y variadas medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno; medidas de carácter judicial, administrativo, social y económico, individuales y colectivas, dentro de un marco de justicia transicional.

Lo cual significa que estas medidas implementadas van dirigidas a las víctimas¹⁴, directas o indirectas, siendo definidas las primeras, en el inciso primero del artículo 3 ídem, al decir que son todas aquellas personas que sufrieron un daño como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno.

⁹ A folio 146 del cuaderno principal.

¹⁰ A folio 126 del cuaderno principal.

¹¹ Constancia secretarial a folio 148 del cuaderno principal.

¹² Auto de pruebas 00621 del 26 de Junio del 2014, a folios 154 a 158 del cuaderno principal.

¹³ Auto #1118 del 10 de Septiembre de 2014, a folio 196 del cuaderno principal tomo I.

¹⁴ Sobre la historia de este concepto a nivel mundial puede leerse a: Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-250 del 28 de Marzo de 2012, expedientes # D-8590, D-8613 y D-8614 acumulados, M.P. doctor HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO, páginas 33 a 36. Otros documentos Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. "Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones." 60/147 Resolución aprobada por la Asamblea General el 16 de diciembre de 2005.

Y las segundas, en los restantes incisos del mentado artículo 3, porque como lo ha sostenido la Corte:

*"...de las pautas contenidas en los dos segmentos normativos acusados se desprende que la consideración como víctimas de personas distintas a quienes por sí mismas hubieren sufrido algún tipo de daño como resultado de las acciones contempladas por esta norma es ciertamente eventual, pues depende de la posible ocurrencia de una de esas situaciones (la muerte o desaparición de la víctima directa), y que en lo que atañe a los familiares de ésta de quienes ese derecho se predica en caso de cumplirse tal condición, no bastará tampoco la acreditación de cualquier tipo de parentesco, pues los beneficios establecidos por esta ley sólo alcanzarán a los sujetos expresamente previstos en la norma acusada. ..."*¹⁵

Debiendo, puntualizar que a las víctimas del conflicto armado interno la jurisprudencia nacional las ha catalogado como sujetos de especial protección, en virtud, a que:

"las víctimas del conflicto armado interno representan uno de los sectores más frágiles dentro de la sociedad¹⁶ y en la mayoría de los casos se encuentran en situación de extrema vulnerabilidad.¹⁷ En efecto, no cabe duda que las víctimas del conflicto armado interno¹⁸ por la violación masiva de sus derechos constitucionales, adquieren el estatus de sujetos de especial protección constitucional, lo que aparea de suyo el deber perentorio del Estado de atender con especial esmero y prontitud todas sus necesidades, hacer valer sus derechos y salvaguardar su dignidad humana. Al respecto esta Corporación ha considerado que "...las víctimas de la violencia dentro de un conflicto armado interno, se encuentran en situación de extrema vulnerabilidad y, en tal sentido, demandan un trato especial por parte de las autoridades públicas, las cuales deben brindarle la ayuda necesaria para que recuperen sus condiciones mínimas de subsistencia. Por lo anterior, resulta pertinente extender a estos casos las consideraciones que esta Corporación ha hecho respecto de los desplazados."¹⁹ ²⁰

Así mismo, la Ley 1448 de 2011 establece²¹ un principio general que debe servir para la interpretación y aplicación de dicha Ley, denominado ENFOQUE DIFERENCIAL, a través del cual se reconoce que, "hay poblaciones con características particulares en razón a su edad, género, orientación sexual y situación de discapacidad", que han sido expuestos, a través de la historia de la humanidad, a mayor riesgo de violación a las normas de Derecho Internacional Humanitario y a las normas internacionales de Derechos Humanos que los cobijan.

¹⁵ Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-052 del 8 de febrero de 2012, expediente # D8593, M.P. doctor NILSON PINILLA PINILLA, páginas 22 a 24. Otras Jurisprudencias a tener en cuenta para el estudio del concepto de víctima son la C-228 de 2002, C-578 de 2002, C-370 de 2006 y C-914 de 2010.

¹⁶ Sentencia C-370 de 2006.

¹⁷ Sentencia T-045 de 2010.

¹⁸ Se pueden observar entre otras las sentencias T-025 de 2004, T-045 de 2010, T-1094 de 2007, entre otras.

¹⁹ Sentencia T-1094 de 2007.

²⁰ Corte Constitucional, Sala Plena, M.P. Dr. JORGE IVÁN PALACIO PALACIO, Sentencia C-609 del 1 de agosto de 2013.

²¹ Artículo 13 de la Ley 1448 de 2011.

Ahora, de las definiciones dadas sobre que se considera víctima en el marco de dicha Ley, se extractan tres elementos para considerarse destinatario de la misma, así:

4.1.1 Que se haya sufrido un DAÑO por hechos ocurridos a partir del 1° de enero de 1985. "... importante destacar que el concepto de daño es amplio y comprehensivo, pues abarca todos los distintos fenómenos usualmente aceptados como fuente generadora de responsabilidad, entre ellos el daño emergente, el lucro cesante, el daño moral en sus diversas formas, el daño en la vida de relación, el desamparo derivado de la dependencia económica que hubiere existido frente a la persona principalmente afectada, así como todas las demás modalidades de daño, reconocidas tanto por las leyes como por la jurisprudencia, ahora o en el futuro."²².

4.1.2 Haya sido sujeto de hechos que impliquen infracciones al DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO y de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos. A partir de 1991, con la expedición de la Constitución Política se inicia un nuevo desarrollo jurídico en nuestro país, siendo uno de sus componentes, el de la inclusión efectiva en nuestro derecho de normas internacionales, apropiándonos del concepto de bloque de constitucionalidad a través del cual se reconoce la jerarquía constitucional a ciertos instrumentos internacionales.

Definiendo la Corte Constitucional el bloque de constitucionalidad, de la siguiente manera:

"... el bloque de constitucionalidad "como aquella unidad jurídica compuesta por normas y principios que, sin aparecer formalmente en el articulado del texto constitucional, son utilizados como parámetros del control de constitucionalidad de las leyes, por cuanto han sido normativamente integrados a la Constitución, por diversas vías y por mandato de la propia Constitución. Son pues verdaderos principios y reglas de valor constitucional, esto es, son normas situadas en el nivel constitucional, a pesar de que puedan a veces contener mecanismos de reforma diversos al de las normas del articulado constitucional strictu sensu."²³.

Evolucionando a instancias como las de hoy en las cuales, el Legislador también ha incluido en la expedición de las leyes, estos conceptos, ejemplo de ello lo vemos en la ley 1448 de 2011 en su Art. 27 al decir que:

"En lo dispuesto en la presente ley, prevalecerá lo establecido en los tratados y convenios internacionales ratificados por Colombia sobre Derecho Internacional Humanitario y Derechos Humanos que prohíban su limitación durante los estados de excepción, por formar parte del bloque de constitucionalidad."

²² Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-052 del 8 de febrero de 2012, expediente # D8593, M.P. doctor NILSON PINILLA PINILLA.

²³ Corte Constitucional Sentencia C - 225 dieciocho (18) de mayo de mil novecientos noventa y cinco (1995) M. P. ALEJANDRO MARTÍNEZ CABALLERO, Santa Fe de Bogotá.

Ahora, como lo que aquí nos demanda es la definición de una acción de restitución de tierras y/o formalización de títulos, la cual busca restituir a sus titulares²⁴, predios que fueron objeto de abandono o despojo forzado, con ocasión del conflicto armado interno, se hace necesario limitar los comportamientos delictuales que pueden implicar la infracción o violación grave de las normas atrás referidas, concluyendo que es el delito denominado Desplazamiento Forzado²⁵, el bacilar de todas estas situaciones irregulares.

Contando Colombia con un amplio marco normativo a nivel de tratados internacionales que hacen alusión a la condición de víctimas de los desplazados en medio del conflicto armado, determinando cuáles son sus derechos y cuáles son los deberes y obligaciones de los Estados frente a esta población, así como las medidas restaurativas, preventivas y de no repetición que se deben implementar para mitigar el daño causado.

Los instrumentos internacionales que deben servir de marco de referencia en esta materia son los siguientes tratados:

a) Declaración Universal de los Derechos Humanos. Adoptada por la Asamblea General en su Resolución 217 a (III), de 1948 (diciembre 10)

b) Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Adoptada en la Novena Conferencia Internacional Americana, Bogotá, en 1948 (Abril)

c) Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Adoptado por la Asamblea General en su Resolución 2200 a (XXI), de 1966 (Diciembre 16) y aprobado en Colombia mediante la Ley 74 de 1968.

d) Convención Americana sobre Derechos Humanos. Suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969. Entrada en

vigor para Colombia 18 de julio de 1978, en virtud de la Ley 16 de 1972.

e) Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional (Protocolo II). Aprobado en Colombia mediante la ley 171 de 1994.

²⁴ Se trata de aquellos que eran titulares del derecho real de dominio -por reunir título y modo- o que se comporten con ánimo de señor y dueño como en el caso de los poseedores en vía de adquirir por prescripción -derecho real provisional- o los explotadores de baldíos que a pesar de sus actividades de explotación no pueden adquirir por prescripción atendiendo la naturaleza de los bienes ocupados.

²⁵ Véase Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-820 del 18 de Octubre de 2012, expediente # D 9012, M.P. doctor MAURICIO GONZALEZ CUERVO, páginas 29 a 31.

f) Declaración de San José sobre refugiados y personas desplazadas. Adoptada por el "Coloquio Internacional: 10 Años de la Declaración de Cartagena sobre Refugiados", celebrado en San José, Costa Rica, del 5 al 7 de diciembre de 1994.

g) Principios rectores de los desplazamientos internos. Presentados por el Representante Especial del Secretario General para la cuestión de los desplazados internos a la Comisión de Derechos Humanos en 1998, en su Informe E/CN.4/1998/Add.2.

h) Principios sobre la restitución de las viviendas y el patrimonio de los refugiados y las personas desplazadas. "Principios Pinheiro"

i) Estatuto de Roma. Aprobado el 17 de julio de 1998 por la Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas sobre el establecimiento de una Corte Penal Internacional. Aprobado en Colombia por la ley 742 de 2002.

j) Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas - Asamblea General ONU, 2007.

4.1.3 Violaciones ocurridas con ocasión del conflicto armado interno. Este tercer elemento nos dice que las violaciones a las normas reseñadas deben estar inmersas o ser producto de un conflicto armado interno, siendo entonces necesario definir si existe como tal dicho conflicto y no se hace mención a un simple disturbio, para ello nuestras cortes²⁶ han tomado de la jurisprudencia internacional dos criterios para determinar que unos hechos pueden ser catalogados como producto de un conflicto armado interno, y son (i) *la intensidad del conflicto*, y (ii) *el nivel de organización de las partes*.²⁷

Y en la misma jurisprudencia, "Añadió que,

"(...) al apreciar la intensidad de un determinado conflicto, las Cortes internacionales han aplicado, por ejemplo, factores tales como la seriedad de los ataques y si ha habido un incremento en las confrontaciones armadas²⁸, la extensión de las hostilidades a lo

²⁶ Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-253A del 29 de Marzo de 2012, expediente s D-8643 y D-8668, M.P. doctor GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO.

²⁷ El Tribunal Internacional para la Antigua Yugoslavia ha explicado en este sentido: "Bajo este test, al establecer la existencia de un conflicto armado de carácter interno la Sala debe apreciar dos criterios: (i) la intensidad del conflicto y (ii) la organización de las partes [ver sentencia del caso Tadic, par. 562]. Estos criterios se utilizan 'solamente para el propósito, como mínimo, de distinguir un conflicto armado de actos de delincuencia, insurrecciones desorganizadas y de corta duración, o actividades terroristas, que no están sujetas al Derecho Internacional Humanitario' [sentencia del caso Tadic, par. 562]. (...) En consecuencia, *un cierto* grado de organización de las partes será suficiente para establecer la existencia de un conflicto armado. (...) Esta posición es consistente con otros comentarios autorizados sobre el tema. Un estudio por el CICR sometido como documento de referencia a la Comisión Preparatoria para el establecimiento de los Elementos de los Crímenes para la CPI notó que: 'La determinación de si existe un conflicto armado no internacional no depende del juicio subjetivo de las partes a ese conflicto; debe ser determinado con base en criterios objetivos; el término 'conflicto armado' presupone la existencia de hostilidades entre fuerzas armadas organizadas en mayor o menor medida; debe haber oposición por las fuerzas armadas, y una cierta intensidad de los combates.(...)'. (...) Tribunal Internacional para la Antigua Yugoslavia, caso del Fiscal vs. Fatmir Limaj y otros, sentencia del 30 de noviembre de 2005.

²⁸ Ver, entre otros, los casos Fiscal v. Dusko Tadic, No. IT-94-1-AR72, decisión de la Sala de Apelaciones sobre su propia jurisdicción, 2 de octubre de 1995; Fiscal vs. Fatmir Limaj y otros, sentencia del 30 de noviembre de 2005; Fiscal vs. Zejnil Delalic y otros (caso Celebici), sentencia del 16 de noviembre de 1998.

largo de un territorio y de un período de tiempo²⁹, el aumento en las fuerzas armadas estatales y en su movilización, así como la movilidad y distribución de armas de las distintas partes enfrentadas³⁰. En cuanto a la organización de los grupos enfrentados, las cortes internacionales la han apreciado de conformidad con criterios tales como la existencia de cuarteles, zonas designadas de operación, y la capacidad de procurar, transportar y distribuir armas.³¹”

Siendo clara la Corte en señalar que:

“(…) para efectos de la aplicación del Derecho Internacional Humanitario, la existencia de un conflicto armado se determina jurídicamente con base en factores objetivos, independientemente de la denominación o calificación que le den los Estados, Gobiernos o grupos armados en él implicados.³²”³³

Además, es necesario destacar respecto a la calidad de víctima que ella se adquiere no por los registros que las entidades estatales implementen, sino, por los hechos que ellas vivieron, posición reiterada por la jurisprudencia nacional al decir³⁴ que:

“..., esta Corporación reitera su jurisprudencia en cuanto a la diferenciación entre la condición de víctima y los requisitos formales y exigencias de trámite para el acceso a los beneficios previstos por las leyes dirigidas a consagrar, reconocer y otorgar beneficios de protección para el goce efectivo de sus derechos. Sobre este tema, esta Corporación ha sostenido que la condición de víctima es un hecho fáctico, que no depende de declaración o de reconocimiento administrativo alguno. En este sentido, ha consolidado una concepción material de la condición de víctima del conflicto armado, entre ellos especialmente del desplazado forzado por la violencia interna, de tal manera que ha precisado que “siempre que frente a una persona determinada, concurren las circunstancias [fácticas] descritas, ésta tiene derecho a recibir especial protección por parte del Estado, y a ser beneficiaria de las políticas públicas diseñadas para atender el problema humanitario que representa el desplazamiento de personas por causa del conflicto armado.”³⁵”.

4.2 DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS EN ESPECIAL EL DERECHO A LA RESTITUCIÓN³⁶

²⁹ Ver, entre otros, los casos Fiscal v. Dusko Tadic, No. IT-94-1-AR72, decisión de la Sala de Apelaciones sobre su propia jurisdicción, 2 de octubre de 1995; Fiscal vs. Fatmir Limaj y otros, sentencia del 30 de noviembre de 2005

³⁰ Ver, entre otros, los casos Fiscal vs. Fatmir Limaj y otros, sentencia del 30 de noviembre de 2005; Fiscal vs. Zejnil Delalic y otros (caso Celebici), sentencia del 16 de noviembre de 1998.

³¹ Ver, entre otros, el caso Fiscal vs. Fatmir Limaj y otros, sentencia del 30 de noviembre de 2005.

³² “Un estudio por el CICR sometido como documento de referencia a la Comisión Preparatoria para el establecimiento de los Elementos de los Crímenes para la CPI notó que: ‘La determinación de si existe un conflicto armado no internacional no depende del juicio subjetivo de las partes a ese conflicto; debe ser determinado con base en criterios objetivos (...)’”. [Traducción informal: “A study by the ICRC submitted as a reference document to the Preparatory Commission for the establishment of the elements of crimes for the ICC noted that: The ascertainment whether there is a non-international armed conflict does not depend on the subjective judgment of the parties to the conflict; it must be determined on the basis of objective criteria (...)”]. Tribunal Internacional para la Antigua Yugoslavia, caso del Fiscal vs. Fatmir Limaj y otros, sentencia del 30 de noviembre de 2005.

³³ Sentencia C-291 de 2007

³⁴ Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-715 del 13 de Septiembre de 2012, expediente # D-8963, M.P. doctor LUIS ERNESTO VARGAS SILVA.

³⁵ Sentencia T-042 de 2009, M.P. Jaime Córdoba Triviño.

³⁶ En cuanto al DERECHO A LA RESTITUCIÓN EN EL DERECHO INTERNACIONAL ver Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-820 del 18 de Octubre de 2012, expediente # D 9012, M.P. doctor MAURICIO GONZALEZ CUERVO, páginas 21 a 24.

Ahora, frente a los diversos derechos que tienen estas víctimas, la jurisprudencia los ha reconocidos como *derechos constitucionales de orden superior*, y los ha sintetizado y esquematizado, diciendo que se:

"han reconocido los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia, a la reparación y a las garantías de no repetición, y el derecho a la restitución como componente fundamental de la reparación, lo cual se fundamenta en varios principios y preceptos constitucionales...", recalcando que *"... las disposiciones legales relacionadas con las víctimas de la violencia, deben interpretarse, de conformidad con la reiterada jurisprudencia constitucional y tomando en cuenta los principios de favorabilidad hacia el entendimiento y restablecimiento de sus derechos³⁷; la buena fe; la confianza legítima³⁸; la preeminencia del derecho sustancial³⁹, y el reconocimiento de la especial condición de vulnerabilidad y debilidad manifiesta de las víctimas."*³⁷.

Además, se ha venido esgrimiendo el concepto del Derecho a la Restitución³⁸, como componente preferente y primordial de la reparación integral, al decir que:

"a juicio de la Sala, se debe adoptar una visión amplia e integral que informe los derechos de las víctimas a la reparación y a la restitución, y su conexión intrínseca con los derechos a la verdad y a la justicia. Así mismo, esta Corporación recaba en que los derechos fundamentales a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la restitución como parte de ésta última, en virtud de las violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos en el marco del conflicto armado, dan lugar a una serie de obligaciones inderogables a cargo del Estado, como la de prevenir estas violaciones, y una vez ocurridas éstas, la obligación de esclarecer la verdad de lo sucedido, la investigación y sanción de este delito sistemático y masivo en contra de la población civil, y la reparación integral a las víctimas, cuyo componente preferente y principal es la restitución, tanto por la vía judicial -penal y

*contencioso administrativa-, como por la vía administrativa, así como el deber de garantizar y facilitar el acceso efectivo de las víctimas a estas diferentes vías."*³⁹

Ahora frente a las regulaciones internacionales existentes, respecto al derecho a la restitución, la jurisprudencia constitucional ha dicho:

"este derecho ha sido regulado en los artículos 1, 2, 8 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; los artículos 1, 2, 8, 21, 24, 25 y 63 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; los artículos 2, 3, 9, 10, 14 y 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y los Principios sobre la restitución de las viviendas y el patrimonio de los refugiados y las personas desplazadas; e igualmente se encuentra consagrado en los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos (Principios Deng); y en los Principios sobre la Restitución de las Viviendas y el Patrimonio de los Refugiados y las Personas Desplazadas (Principios

³⁷ Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-715 del 13 de Septiembre de 2012, expediente # D-8963, M.P. doctor LUIS ERNESTO VARGAS SILVA.

³⁸ En cuanto al DERECHO A LA RESTITUCIÓN EN EL DERECHO INTERNACIONAL ver Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-820 del 18 de Octubre de 2012, expediente # D 9012, M.P. doctor MAURICIO GONZALEZ CUERVO, páginas 21 a 24.

³⁹ Ídem 27.

Pinheiro), que hacen parte del bloque de constitucionalidad en sentido lato.”⁴⁰

Y en la misma sentencia preceptuó:

“En el orden interno, el derecho a la restitución como parte esencial de la reparación integral, en conexidad con los derechos a la verdad, a la justicia y a las garantías de no repetición, encuentra su fundamento constitucional en el Preámbulo y en los artículos 2, 29, 93, 229 y 250 de la Constitución Política, siendo derechos fundamentales y por tanto de aplicación inmediata. Así, la jurisprudencia constitucional ha reconocido que la restitución hace parte integral y esencial del derecho fundamental a la reparación integral de las víctimas del conflicto armado.” (Negrillas fuera del texto).

4.3 JUSTICIA TRANSICIONAL

Los Derechos mencionados deben ser satisfechos no a través de los mecanismos ordinarios, al ser insuficientes, sino mediante otros nuevos y extraordinarios, surgiendo así un nuevo concepto de Justicia, la Justicia Transicional⁴¹, explicado por la Honorable Corte Constitucional al estudiar la exequibilidad de apartes de la Ley 1448 de 2011, así:

“Según lo ha planteado la jurisprudencia de esta Corte⁴², puede entenderse por justicia transicional una institución jurídica a través de la cual se pretende integrar diversos esfuerzos, que aplican las sociedades para enfrentar las consecuencias de violaciones masivas y abusos generalizados o sistemáticos en materia de derechos humanos, sufridos en un conflicto, hacia una etapa constructiva de paz, respeto, reconciliación y consolidación de la democracia, situaciones de excepción frente a lo que resultaría de la aplicación de las instituciones penales corrientes⁴³.

Ahora bien, no obstante que el texto de esta ley no contiene ninguna específica precisión en ese sentido, de la lectura de su extenso articulado puede observarse que se trata de un conjunto de disposiciones especiales, adicionales a las previamente contenidas en los principales códigos⁴⁴ y en otras leyes de carácter ordinario, relativas a los derechos de las víctimas de determinados hechos punibles y de otras situaciones consecuenciales, que en cuanto tales se superponen y se aplicarán en adición a lo previsto en tales normas ordinarias⁴⁵.” (Negrillas fuera del texto)

4.4 ACCION DE RESTITUCIÓN Y/O FORMALIZACIÓN DE TÍTULOS

⁴⁰ Ídem 27.

⁴¹ Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-052 del 8 de febrero de 2012, expediente # D8593, M.P. doctor NILSON PINILLA PINILLA, página 21.

⁴² La Corte ha analizado ampliamente los alcances de este concepto, especialmente desde la sentencia C-370 de 2006 (Ms. Ps. Cepeda Espinosa, Córdoba Triviño, Escobar Gil, Monroy Cabra, Tafur Galvis y Vargas Hernández), y en los últimos meses en los fallos C-936 de 2010 (M. P. Luis Ernesto Vargas Silva) y C-771 de 2011 (M. P. Nilson Pinilla Pinilla).

⁴³ C-771 de 2011 antes citada.

⁴⁴ Entre ellos el Penal, el Civil y sus respectivos códigos procesales y el Contencioso Administrativo.

⁴⁵ En todo caso no deberá existir acumulación entre los beneficios y prestaciones desarrollados por esta ley y otros de igual contenido regulados por las leyes ordinarias. Para ello, algunos de sus artículos relativos a las formas de reparación a que las víctimas tendrán derecho contienen advertencias sobre la necesidad de descontar las sumas previamente recibidas por el mismo concepto. Ver especialmente los artículos 20, 59 y 133.

Dentro de esos mecanismos novedosos implementados al interior del concepto de Justicia Transicional, encontramos la Acción de Restitución de Tierras Y/O Formalización de Títulos, a la que la Corte le ha endilgado un carácter especialísimo, al decir:⁴⁶

"4.5.3.2. La naturaleza especial de este procedimiento constituye una forma de reparación, en tanto a través de un procedimiento diferenciado y con efectos sustantivos no equivalentes a los propios del régimen del derecho común, se fijan las reglas para la restitución de bienes a las víctimas definidas en el artículo 3 de la ley 1448 de 2011. Esa especialidad, que explica su condición de medio de reparación, se apoya no solo en las características del proceso definido para tramitar las pretensiones de restitución a la que se hizo referencia anteriormente sino también en las reglas sustantivas dirigidas a proteger especialmente al despojado. En relación con esta última dimensión, inescindiblemente vinculada con la procesal, cabe destacar, por ejemplo, el régimen de presunciones sobre la ausencia de consentimiento o causa ilícita, las reglas de inversión de la carga de la prueba, la preferencia de los intereses de las víctimas sobre otro tipo de sujetos, la protección de la propiedad a través del establecimiento de restricciones a las operaciones que pueden realizarse después de la restitución y el régimen de protección a terceros de buena fe -de manera tal que los restituidos no se encuentren obligados a asumir el pago de valor alguna por las mejoras realizadas en el predio, debiendo éste ser asumido por el Estado-."

Ahondando aún más en esas características que convierten esta acción en especial, la Corte en materia probatoria⁴⁷ ha dicho:

"que las medidas adoptadas en el marco de la Ley 1448 de 2011 tienen como primer presupuesto la afirmación de un principio de buena fe, encaminado a liberar a las víctimas de la carga de probar su condición. Conforme a ese principio, **se dará especial peso a la declaración de la víctima, y se presumirá que lo que ésta aduce es verdad, de forma que en caso de duda será el Estado quien tendrá la obligación de demostrar lo contrario.** En consecuencia, bastará a la víctima probar de manera sumaria el daño sufrido ante la autoridad administrativa, para que ésta proceda a relevarla de la carga de la prueba." (Negrillas fuera del texto).

5. PRESUPUESTOS PROCESALES:

Es bien sabido que lo primero que se debe examinar al proferir sentencia, son los llamados presupuestos procesales, pues, son los requisitos necesarios para la conformación válida y regular de la relación jurídico-procesal. Según la Doctrina y la Jurisprudencia, tales presupuestos son: Competencia, capacidad para ser parte, capacidad procesal y demanda en forma.

⁴⁶ Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-820 del 18 de Octubre de 2012, expediente # D 9012, M.P. doctor MAURICIO GONZALEZ CUERVO, páginas 35 a 39.

⁴⁷ Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-253A del 29 de Marzo de 2012, expediente s D-8643 y D-8668, M.P. doctor GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO, página 65.

5.1 COMPETENCIA: La tiene este juzgado por el factor objetivo, en tratándose de la acción de restitución de tierras y/o formalización de títulos, por el factor funcional, al no existir oposición a la solicitud de restitución (Artículo 79 de la Ley 1448 de 2011) y territorial, al estar ubicado el predio en el departamento del Putumayo (Artículo 80 de la Ley 1448 de 2011).

5.2 CAPACIDAD PROCESAL Y PARA SER PARTE: La solicitante y su compañero tienen capacidad para ser parte y para comparecer al proceso, lo anterior por ser personas naturales, mayores de edad, con la libre disposición de sus derechos.

Así mismo, la parte demandante⁴⁸ se encuentra representada por la Unidad de Tierras Despojadas, entidad que les nombró apoderado judicial⁴⁹, cumpliendo con el derecho de postulación.

5.3 SOLICITUD EN FORMA: La demanda o solicitud está en forma pues cumple con los requisitos previstos en el artículo 84 de la Ley 1448 de 2011 y se tramitó conforme al procedimiento reglado en esta, específicamente, en los artículos 71 y siguientes.

6. PRESUPUESTOS SUSTANCIALES.

Aquí debemos tener en cuenta que dentro de estos elementos se deben estudiar la legitimación en la causa y los Presupuestos de la Acción de Restitución Y/O Formalización de títulos, pero, siendo concordantes los supuestos que los integran, pasaremos a hacer un solo análisis de ellos, en busca de mayor precisión conceptual y de no hacer más extensa la providencia.

Para ello se debe partir de los artículos 75 y 81 de la Ley 1448 de 2011, que establecen que la acción de restitución de tierras la tiene, entre otros, el propietario, poseedor u ocupante del bien que haya sido despojado de este o que se haya visto obligado a abandonarlo como consecuencia directa o indirecta de los hechos que configuren las violaciones de que trata el artículo 3 ídem, entre el 1 de enero de 1991 y el término de vigencia de la Ley; y su cónyuge o compañera o compañero permanente, con quien se conviva al momento en que ocurrieron los hechos o amenazas que llevaron al despojo o al abandono forzado, según el caso.⁵⁰

Igualmente, la Acción de Restitución de Tierras Y/O Formalización de Títulos consagrada en el título IV capítulo III, artículos 72 y siguientes de la Ley 1448 de 2011, tiene como elementos o presupuestos sustanciales, en nuestra

⁴⁸ Solicitud de representación a folio 101 del cuaderno principal.

⁴⁹ A folio 114 del cuaderno principal.

⁵⁰ Aquí se enuncian los casos que se adecuan a esta solicitud, los artículos allí referidos enuncian otros sujetos.

consideración tres, los cuales deben ser demostrados en el transcurso del proceso para que salgan avante dichas pretensiones de restitución y/o formalización.

6.1 CALIDAD DE VÍCTIMA DESDE LA VISIÓN DEL ARTÍCULO 3 DE LA LEY 1448 DE 2011.⁵¹

Para probar este elemento se debe partir de las definiciones y conceptos dados en el artículo 3 de la ley 1448 de 2011 y del marco conceptual esbozado en las jurisprudencias atrás transcritas.

La interesada, para asumir esta carga probatoria afirmó en la demanda que debido a los hechos de violencia generados con ocasión del conflicto armado, entre la guerrilla y los paramilitares, por el apoderamiento de la zona, se vió obligada a desplazarse con su familia en dos ocasiones, de la Inspección de Policía del Placer del Municipio del Valle del Guamuez, en el mes de marzo del 2003 y en forma definitiva en el año de 2006.

Esas manifestaciones se presumen ciertas y veraces, y de ellas se concluye que efectivamente fueron sujetos del delito de desplazamiento forzado⁵² en los años 2003 y 2006, vulneración grave a los Derechos Humanos, en ocasión del conflicto armado interno que vive nuestro país, que llevo incito el despojo o abandono forzado de su predio, de la dejación de sus pertenencias, de su entorno familiar, cultural y social, sus costumbres, sus amigos, con la sensación de pérdida y de miedo y temor por su vida, del daño material de su vivienda, de los muebles que constituían su habitat, de la pérdida de sus cultivos y del robo de sus animales, lo que constituye el daño material y moral que debe estar presente en la susodicha calidad de víctima.

Así mismo, la accionante y su núcleo familiar se encuentran inscritos desde el 17 de Septiembre del año 2010 en el Registro Único de Víctimas⁵³. Documento que constituye prueba fidedigna, al contener una manifestación de la Unidad de Restitución de tierras, concepto que entiende este despacho como el medio de prueba que se presume auténtico y verídico, es decir, que da fe de su origen y de la verdad de su contenido.

Además, con los documentos remitidos por la Defensoría del Pueblo, emanados del Sistema de Alertas Tempranas⁵⁴, se demuestra que en la región en que se encuentra ubicado el

⁵¹ Ver ítems 4.1.1, 4.1.2 y 4.1.3.

⁵² Parágrafo segundo artículo 60 de la Ley 1448 de 2011: "Para los efectos de la presente ley, se entenderá que es víctima del desplazamiento forzado toda persona que se ha visto forzada a migrar dentro del territorio nacional, abandonando su localidad de residencia o actividades económicas habituales, porque su vida, su integridad física, su seguridad o libertad personales han sido vulneradas o se encuentran directamente amenazadas, con ocasión de las violaciones a las que se refiere el artículo 3 de la presente Ley."

⁵³ A folios 48 al 49 del cuaderno principal.

⁵⁴ Informe de Riesgo No. 011-03-AI, contenido en CD ubicado en parte posterior del cuaderno principal.

predio, Municipio del Valle del Guamuez, para el tiempo del desplazamiento, existían enfrentamientos entre dos de los actores armados que participan del conflicto armado interno, como son las FARC y las AUC, por el control territorial, y que fueron por dichos enfrentamientos que el núcleo familiar aquí solicitante tuvo que dejar su predio.

También, con la información comunitaria, las referencias documentales y los videos contenidos en el cd⁵⁵ que se allegó con la demanda, y el informe del proyecto CODHES⁵⁶, se demuestra el contexto de violencia generado en la región conocida como bajo putumayo y en especial en la Inspección del Placer del Municipio del Valle del Guamuez, por los grupos armados ilegales.

Por lo anterior, se concluye que se probó la condición de víctima en la solicitante y su núcleo familiar desde la perspectiva del referido artículo 3, lo que satisface este primer presupuesto.

6.2 ABANDONO O DESPOJO FORZADO DEL PREDIO DEL CUAL SE SOLICITA SU RESTITUCIÓN.

Para el estudio de este presupuesto debemos tener en cuenta que este consta de dos elementos que lo estructuran, cuales son el comportamiento de abandono o despojo forzado dentro de un espacio temporal y un segundo, de individualización e identidad del predio objeto de restitución con el predio abandonado o despojado.

6.2.1 Comportamiento de abandono o despojo forzado dentro de un espacio temporal. Aquí tomamos las definiciones contenidas en el artículo 74 ibídem, y teniendo en cuenta las circunstancias que han rodeado la situación de la solicitante, podemos decir que encuadra la misma en lo que se entiende por abandono forzado.

Y así, se haya intentado volver al predio (se logre o no), no quiere ello decir que desaparezca la calificación de despojo o abandono forzado que se suscitó en su momento, porque así se regrese, no se hace en las mismas condiciones en que se estaba y ya se ha causado un daño en los diferentes aspectos que en el ítem anterior se plasmaron.

Ahora, la reclamante afirma que su desplazamiento forzado, con respecto al predio, se presentó en dos ocasiones, en el mes de marzo del 2003 y definitivamente en el año 2006, por los enfrentamientos entre la guerrilla y los grupos paramilitares por el apoderamiento de la zona, lo que se demuestra a través de su dicho; manifestaciones que no han

⁵⁵ A folios 28 del cuaderno principal.

⁵⁶ A folios 183 a 187 del cuaderno principal.

sido desvirtuadas por el Estado, por lo que se presumen ciertas al provenir de un sujeto de especial protección, y porque como lo ha dicho nuestro máximo órgano constitucional,

"se dará especial peso a la declaración de la víctima, y se presumirá que lo que ésta aduce es verdad, de forma que en caso de duda será el Estado quien tendrá la obligación de demostrar lo contrario."

En este orden de ideas, y al ser los límites temporales el 1 de enero de 1991 hasta la fecha de vigencia de la ley 1448 de 2011, podemos concluir que sí se presentó el despojo o abandono forzado del predio ya identificado, a que se vio avocada la solicitante y su familia, y se dio dentro de estos límites temporales.

6.2.2 Individualización e identidad del predio objeto de restitución con el predio abandonado o despojado. El predio del cual se persigue su restitución y ocupado por la reclamante, individualizado en el hecho 2.1 de esta providencia, guarda identidad con el descrito en el Informe Técnico Predial y el Informe Técnico de Georeferenciación⁵⁷ realizados por la Unidad de Tierras Despojadas, los cuales partieron de la información dada por la demandante, por la visita al predio, por la información de los colindantes (Acta de colindancia)⁵⁸, por la Escritura Pública⁵⁹ número 139 del 24 de febrero del año 1998, por las cartas catastrales del IGAC, experticia que constituye un medio probatorio idóneo, al ser un dictamen pericial rendido por expertos profesionales.

Además, con el informe presentado por el IGAC⁶⁰, quien confirma que una vez realizada visita ocular al predio reclamado, la información encontrada coincide con el levantamiento topográfico presentado por la Unidad de Tierras, en ese sentido y según lo manifestado en el mentado informe la entidad encontró que el predio objeto del litigio, hacer parte de uno de mayor extensión relacionado con el numero predial No. 86-865-00-02-0001-0303-000, por lo que procede a realizar una mutación de segunda (desenglobe), generando el predio No. 86-865- 0156-2014.

De la misma manera se reporta que al estar registrado en el folio de matrícula No. 442- 45558 como propietario, el señor WILIAR CASTILLO CEPEDA se inscribe a la misma persona en la base catastral del IGAC; finalmente luego de la inspección quedará con 380 m2 como lo georeferencio la Unidad de Tierras.

⁵⁷ A folios 63 a 69 y 74 a 83 del cuaderno principal.

⁵⁸ A folios 82 a 83 del cuaderno principal.

⁵⁹ A folios 71 a 72 del cuaderno principal.

⁶⁰ A folio 193 del cuaderno principal.

6.3 RELACIÓN JURÍDICA DE LA VÍCTIMA CON EL PREDIO O CALIDAD QUE SE INVOCA EN RELACIÓN AL PREDIO.

Se demuestra en el presente asunto que la relación jurídica de la reclamante con el predio es la de COPROPIETARIA, teniendo en cuenta que se probó con Escritura Pública⁶¹ número 139 del 24 de febrero del año 1998, la cual se encuentra debidamente registrada en la ORIP de Puerto Asís Putumayo, bajo el número de matrícula inmobiliaria 442-45558⁶², que el propietario de dicho bien es el señor ARTURO WILIR CEPEDA CASTILLO, persona con quien a la fecha del desplazamiento convivía, hecho que se encuentra plenamente demostrado y corroborado con el acervo probatorio, al encontrar la manifestación contenida en el escrito obrante a folio 122, la que es suscrita por su ex compañero sentimental, a través del cual acepta la sociedad marital que existió entre los mentados, y del que se deriva que la parte que a este le corresponda se entiende donada para sus hijas.

En este punto, es necesario traer a colación lo preceptuado en el parágrafo cuarto del artículo 91 y artículo 188 de la Ley 1448 de 2011, en relación a que el título del bien deberá entregarse a nombre de los dos cónyuges o compañeros permanentes, que al momento del desplazamiento, abandono o despojo, cohabitaban y hubieren sido víctimas, así al momento de la entrega del título no estén unidos por ley, y aun cuando uno de ellos no hubiere comparecido al proceso.

De los hechos⁶³ de la demanda, de la declaración rendida por la solicitante⁶⁴ ante la unidad de tierras, de la ampliación de declaración⁶⁵, y del escrito firmado por el señor ARTURO WILIR CEPEDA CASTILLO⁶⁶, se demuestra la existencia de una relación marital de hecho entre el titular del derecho real y la solicitante del predio en restitución, a la fecha del desplazamiento sufrido por ambos, lo que tendría como efecto para este caso, el que se declare el derecho que tienen los referidos a que se les restituya y se valide la copropiedad del bien a su nombre, sin embargo teniendo en cuenta el escrito anteriormente mencionado, se entenderá y se declarará como sujetos del derecho de restitución, solamente a la solicitante y a sus dos hijas JISSELA VANNESA y DISNEY STEFANNYA CEPEDA IDROBO.

Hasta este momento se han cumplido con cada uno de los presupuestos requeridos en la ley y en la Jurisprudencia para que la parte solicitante esté legitimada en la causa por

⁶¹ A folios 71 a 72 del cuaderno principal.

⁶² A folio 133 a 135 del cuaderno principal.

⁶³ Del hecho 1 e ítem 3.3 de la demanda.

⁶⁴ A folio 36 del cuaderno principal.

⁶⁵ A folio 40 al 42 del cuaderno principal.

⁶⁶ A folio 122 del cuaderno principal

activa, y así pueda salir avante la acción de restitución aquí impetrada, lo cual se declarará en la parte resolutive.

7. COMPONENTE DE REUBICACIÓN O RETORNO.

7.1 FUNDAMENTO LEGAL DE LOS PLANES DE REUBICACIÓN O RETORNO:

En el artículo 66 de la Ley 1448 de 2011 se establece para el Estado la obligación de garantizar el goce efectivo de los derechos de las víctimas de desplazamiento forzado que decidan voluntariamente retornar o reubicarse, en condiciones de seguridad, a través del diseño de esquemas especiales de acompañamiento, correspondiendo a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas el adelantamiento, coordinación e implementación con las diferentes entidades que hacen parte del Sistema Nacional de Atención y Reparación a las Víctimas, de dichos planes de retorno o reubicación⁶⁷, los cuales tendrán como fin principal el cese de la condición de vulnerabilidad y debilidad manifiesta de los retornados o reubicados, debiendo hacer evaluaciones⁶⁸ periódicas.

Estos programas deben estar en consonancia con los Principios Rectores⁶⁹ del derecho a la Restitución de las Tierras, consagrados en la referida Ley de Víctimas, al establecer, que, *"La restitución de tierras, acompañada de acciones de apoyo pos-restitución, constituye la medida preferente de reparación integral para las víctimas."*⁷⁰, buscando *"propender de manera progresiva por el restablecimiento del proyecto de vida de las víctimas;"*⁷¹ en *"...condiciones de sostenibilidad, seguridad y dignidad;"*⁷² y *"con plena participación de las víctimas"*⁷³.

7.2 CONTROL JUDICIAL AL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE REUBICACIÓN Y RETORNO:

La Ley 1448 de 2011, en el literal p) del artículo 91, otorga la facultad al Juez o Magistrado para que pueda emitir las órdenes necesarias, a fin de *"garantizar la efectividad de la restitución jurídica y material del bien inmueble y la estabilidad en el ejercicio y goce efectivo de los derechos de las personas reparadas"*, quedando en el operador judicial

⁶⁷ Artículo 76. *Responsabilidades institucionales.* La Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación de las Víctimas coordinará y articulará el diseño e implementación de las acciones dirigidas a garantizar la implementación integral de los procesos de retorno y reubicación, en conjunto con las entidades nacionales y territoriales del Sistema Nacional de Atención y Reparación a las Víctimas. Las autoridades del Sistema Nacional de Atención y Reparación a las Víctimas deberán brindar su oferta institucional en el lugar de retorno o reubicación. **Parágrafo.** Las acciones de coordinación, planeación, seguimiento y participación de las víctimas incluidas en los procesos de retorno y reubicación se realizarán en el marco de los Comités Territoriales de Justicia Transicional bajo los lineamientos previstos en el Protocolo de Retorno y Reubicación.

⁶⁸ Artículo 68 de la Ley 1448 de 2011.

⁶⁹ Artículo 73 de la Ley 1448 de 2011.

⁷⁰ PREFERENTE.

⁷¹ PROGRESIVIDAD.

⁷² ESTABILIZACIÓN.

⁷³ PARTICIPACIÓN.

la competencia para ello, incluso después de que quede en firme la providencia que la contenga, y, "hasta tanto estén completamente eliminadas las causas de la amenaza sobre los derechos del reivindicado en el proceso."; así mismo, ordena a todos los servidores públicos que deben apoyar a aquellos en el cumplimiento de la sentencia.

7.3 VERIFICACIÓN PLANES EXISTENTES:

A partir de la primera sentencia proferida por este despacho dentro de la acción de restitución de tierras radicada al número 2013-00098-00, de un predio ubicado en la Inspección del Placer del municipio del Valle del Guamuez, veníamos sosteniendo que para dicha jurisdicción no existía un plan de retorno para las víctimas del conflicto y que se debía desarrollar como tal, por ello se ordenó que así se hiciera, con la característica de que fuera un plan de retorno colectivo y en el que se priorizará a las víctimas a las cuales les fuere reconocido el derecho a la restitución de la tierra.

Sin embargo, el pasado 12 de Noviembre de 2013, se presentó por parte de la Unidad de Víctimas el "Plan de Retorno" actualizado y debidamente aprobado por el Comité de Justicia Transicional de dicho municipio, así mismo, se llevó a cabo la audiencia de seguimiento a las órdenes que se han emitido por este Juzgado y en lo que atañe a este tópico, se hizo una presentación de cómo se construyó el mismo y de cómo se ha venido ejecutando.

Por ello, frente a este Plan de Retorno el despacho se atiene a lo manifestado en el auto número 344 del 08 de abril de 2014, dentro del proceso radicado al número 2012-00098-00, y se entiende incorporado a esta sentencia.

Así mismo se advierte que en este pronunciamiento se declarará el derecho que tiene la reclamante y su núcleo familiar, a que se la tenga en cuenta y priorice, dentro de los diversos componentes que estructuran el mismo⁷⁴ y frente a todas aquellas políticas implementadas por el Estado para garantizar los derechos que tienen las víctimas del conflicto armado interno, siempre y cuando, se dé el retorno y/o el inicio o continuación de explotación económica del predio.

8. DE LAS PRETENSIONES.

Frente a las pretensiones principales enunciadas en los numerales 1, 2, 3, 4, 9, 12 y las complementarias, ellas se declararán. En cuanto a las pretensiones enunciadas en los ítems 5, 6, 10, 11, secundaria 1 y secundaria 2, es dable

⁷⁴ como son: 1. Salud 2. Alimentación 3. Educación 4. Identificación 5. Reunificación familiar 6. Orientación ocupacional 7. Vivienda 8. Atención psicosocial 9. Tierras 10. Servicios públicos básicos 11. Vías y comunicaciones 12. Seguridad alimentaria 13. Ingresos y trabajos 14. Organización social.

manifestar que en el asunto aquí tratado no aplican, por no darse los supuestos que las fundamentan, sin dejar de advertir, que en el evento en que varíen o persistan las condiciones para el caso de las pretensiones 10 y 11, podría modificarse esta decisión. Respecto a las pretensiones enunciadas en los ítems 7 y 8, ellas corresponden a actos procesales que se hicieron efectivos en el transcurso del proceso.

Frente a las órdenes que aquí se impartan, debe tenerse muy en cuenta que el núcleo familiar de la reclamante lo conforma ella junto a sus dos hijas menores de edad, víctimas del delito de Desplazamiento Forzado, lo que conlleva a que el estado debe aplicar en su favor el principio de ENFOQUE DIFERENCIAL para la interpretación de normas y aplicación de políticas de estado, convirtiéndose en sujetos de especial protección reforzada.

En mérito de lo expuesto, el Juzgado Primero Civil del Circuito, Especializado en Restitución de Tierras, de Mocoa, Putumayo, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO.- **DECLARAR, RECONOCER y PROTEGER** a la señora YANET IDROBO identificada con la cédula de ciudadanía No. 27.443.058 expedida en San Lorenzo, Nariño y a sus hijas JISSELA VANNESA CEPEDA IDROBO T.I 1006996483 y DISNEY STEFANNYA CEPEDA IDROBO, T.I 1006996484, en su derecho fundamental a la Restitución y/o Formalización, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO.- **DECLARAR** a la señora YANET IDROBO y a sus hijas JISSELA VANNESA y DISNEY STEFANNYA CEPEDA IDROBO, como PROPIETARIAS, del predio situado en la vereda El Placer de la Inspección de Policía del Placer, Municipio Valle del Guamuez, Departamento del Putumayo, el que se individualiza como sigue:

MATRICULA INMOBILIARIA	CÓDIGO CATASTRAL ANTERIOR	CÓDIGO CATASTRAL VIGENTE	ÁREA TOTAL DEL PREDIO
442-45558	86-865-00-02-0001-0303-000	86-865-00-02-0001-0983-000	380 M2

Con las siguientes coordenadas geográficas:

PUNTOS	COORDENADAS PLANAS		LONGITUD			LATITUD		
	NORTE	ESTE	Grados	Min.	Seg.	Grados	Min.	Seg.
215	543632.99647300000	676270.84132400000	76°	59'	4.044" w	0°	28'	6.412" N
216	543613.03741600000	676263.69457500000	76°	59'	4.275" w	0°	28'	5.763" N

217	543612.98062200000	676248.69468200000	76° 59' 4.759" w	0° 28' 5.761" N
218	543632.09260500000	676246.85835000000	76° 59' 4.819" w	0° 28' 6.382" N

Y colindante de la siguiente manera:

COLINDANTES ACTUALES	
NORTE	Partiendo desde el punto 218 en línea recta en dirección oriente, en una distancia de 24 mts hasta llegar al punto 215 con predios de Raquel Cuaran.
ORIENTE	Partiendo desde el punto 215 en línea recta en dirección Sur, hasta llegar al punto 75 en una distancia de 21,2 mts con predios de Via Urbana El Placer.
SUR	Partiendo desde el punto 75 en línea recta en dirección Occidente, hasta llegar al punto 216 en una distancia de 21,2 mts con predio Juan Bautista Guerrero.
OCCIDENTE	Partiendo desde el punto 217 en línea recta en dirección Norte, cerrando con el punto 218 en una distancia de 19,2 mts con predios del a señora Teresa Perez.

TERCERO.- COMISIONAR⁷⁵ al Juez Promiscuo Municipal del Valle del Guamuez, Putumayo, para que dentro del término de treinta (30) días siguientes al recibo del Despacho Comisorio, realice la diligencia de entrega a la aquí solicitante del predio atrás reseñado. Para la materialización de dicho acto procesal, debe coordinar con la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas - Dirección Territorial Putumayo y la Fuerza Pública, a fin de obtener el apoyo logístico. Por secretaría líbrese el despacho comisorio.

CUARTO.- ORDENAR al Instituto Geográfico Agustín Codazzi, para que dentro del término perentorio de dos (2) meses, contados a partir del recibo de la calificación de las sentencias en el respectivo folio de matrícula inmobiliario o el certificado de libertad y tradición actualizado, proceda a la actualización de sus registros cartográficos y alfanuméricos, atendiendo los criterios de individualización del predio reconocido en este fallo, de lo cual debe rendir informe a este Despacho.

QUINTO.- ORDENAR a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Puerto Asís, Putumayo, realice la correspondiente inscripción de esta Sentencia en el folio de matrícula inmobiliaria número 442-45558.

Igualmente, se ordena el levantamiento de las medidas cautelares de inscripción de la demanda y de sustracción provisional del comercio del bien inmueble.

Además, deberá hacer llegar a este Despacho y al IGAC el respectivo certificado de libertad y tradición debidamente actualizado, en el término de cinco días contados a partir de las referidas inscripciones.

⁷⁵ Inciso segundo artículo 100 de la Ley 1448 de 2011

SEXTO.- **DISPONER** como medida de protección, la restricción establecida en el artículo 101 de la Ley 1448 de 2011, consistente en la prohibición para enajenar el bien inmueble restituido durante el término de dos (2) años, siguientes a la expedición de esta sentencia, sin menoscabo de las prohibiciones de que trata la Ley 160 de 1994. Por Secretaría librese comunicación a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Puerto Asís, Putumayo, para que la inscriba en el folio de matrícula inmobiliaria 442-45558.

SÉPTIMO.- **REITERAR** la orden dada a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y a las entidades que conforman el Sistema Nacional de Atención y Reparación a las Víctimas, del orden nacional y territorial, en la sentencia número 246 del 19 de noviembre de 2013 proferida dentro del expediente 2013-00070-00, frente a la ejecución del plan de retorno aprobado el pasado 29 de octubre de 2013 para las veredas de la Inspección del Placer del Municipio del Valle del Guamuez, Putumayo, siguiendo los parámetros establecidos en la ley 1448 de 2011 y el decreto 4800 de 2011, bajo la coordinación de la Unidad de Víctimas.

Así mismo, frente a este Plan de Retorno el despacho se atiene a lo manifestado en el auto número 344 del 08 de abril de 2014, dentro del proceso radicado al número 2012-00098-00, y se entiende incorporado a esta sentencia.

Además, el derecho que tiene la reclamante y su núcleo familiar a que se la tenga en cuenta y priorice, dentro de los diversos componentes que estructuran el Plan de Retorno y frente a todas aquellas políticas implementadas por el Estado para garantizar los derechos que tienen las víctimas del conflicto armado interno, recalcando el hecho de que el núcleo familiar de la reclamante lo conforma ella junto a sus dos hijas menores de edad, víctimas del delito de Desplazamiento Forzado, lo que conlleva a que el estado debe aplicar en su favor el principio de **ENFOQUE DIFERENCIAL** para la interpretación de normas y aplicación de políticas de estado, convirtiéndose en sujetos de especial protección reforzada.

OCTAVO.- **ORDENAR** al Ministerio de Defensa, y en especial al Departamento de Policía Putumayo y a la Sexta División del Ejército Nacional, con jurisdicción en el municipio Valle Del Guamuez, para que en ejercicio de su misión institucional y constitucional, coordinen las actividades y gestiones que sean necesarias para que brinden la seguridad que se requiera a fin de garantizar la materialización de lo dispuesto en esta sentencia, lo cual debe hacer parte del Plan de Retorno coordinado por la Unidad de Víctimas.

NOVENO.- **ORDENAR** al Municipio del Valle del Guamuez, Putumayo, a través de su Alcalde Municipal y del Concejo Municipal, para que aplique el acuerdo No. 010 del 17 de marzo del 2013, "Por el cual se establece la condonación y exoneración del impuesto predial, tasas y otras contribuciones a favor de los predios restituidos o formalizados en el marco de la ley 1448 de 2011" a los reclamantes de la acción de la referencia. De ello deberán presentar el informe respectivo dentro de los dos meses siguientes al recibo de la comunicación.

DECIMO.- **ORDENAR** al Fondo de la Unidad de Tierras, aliviar las deudas que por concepto de servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo y energía eléctrica, tenga con las empresas prestadoras de los mismos y con las entidades financieras, en especial con el Banco Agrario, por préstamos que tengan relación con el predio. De ello deberán presentar el informe respectivo dentro de los dos meses siguientes al recibo de la comunicación.

DÉCIMO PRIMERO.- **NEGAR** las pretensiones enunciadas en la demanda en los ítems 5, 6, 10, 11, secundaria 1 y secundaria 2. Se aclara que en el caso aquí tratado no aplican dichas solicitudes, por no darse los supuestos que las fundamentan, sin dejar de advertir, que en el evento en que varíen o persistan las condiciones para el caso de las pretensiones 10 y 11, podría modificarse esta decisión. Respecto a las pretensiones enunciadas en los ítems 7 y 8, ellas corresponden a actos procesales que se hicieron efectivos en el transcurso del proceso.

DÉCIMO SEGUNDO.- **NOTIFICAR** mediante oficio la presente sentencia al Representante legal del municipio del Valle Del Guamuez, Putumayo, al agente del Ministerio público y al representante de la solicitante, de conformidad con el artículo 93 de la ley 1448 de 2011, anexando copia de la misma.

Para dar cumplimiento a las órdenes aquí emanadas se remitirá copia virtual de esta providencia a las Direcciones Generales de las Unidades de Víctimas y de Tierras Despojadas, al Gobernador del Departamento del Putumayo, a CORPOAMAZONIA y a las entidades que pertenecen al Sistema Nacional de Atención y Reparación a las Víctimas.

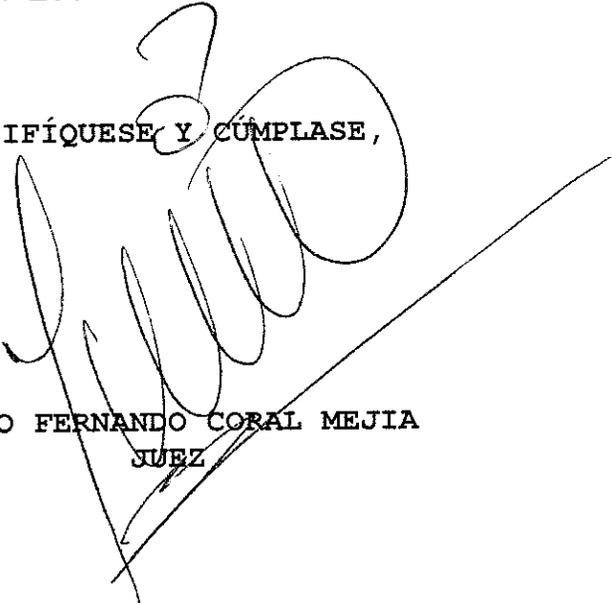
Así mismo, a los entes de control, Procuraduría General de la Nación, Contraloría General de la República y Defensoría del Pueblo.

Por secretaría, líbrense los oficios, las comisiones y las comunicaciones pertinentes.

Se advierte que al no tener recursos la presente providencia, por ser este un proceso de Única Instancia, queda debidamente ejecutoriada al momento de ser proferida.

DÉCIMO SEGUNDO.- SIN LUGAR a condena en costas.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,



MARIO FERNANDO CORAL MEJIA
JUEZ